



A LA MESA DEL SENADO

El Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, a propuesta de los **Senadores del Partit Demòcrata Europeu Català**, presentan los siguientes votos particulares a la Propuesta de la Comisión Conjunta de las Comisiones General de las Comunidades Autónomas y Constitucional, relativa al "Requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de medidas a que hace referencia el artículo 155 de la Constitución":

Palacio del Senado, 27 de octubre de 2017.



Josep Lluís Cleries i González
Portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado



VOTO PARTICULAR Num. 1

DE MODIFICACIÓN DEL APARTADO I

Redacción que se propone:

El Senado constata:

1. Que el Estatuto de Autonomía de Catalunya, como Pacto entre el Parlament de Catalunya y las Cortes Generales fue aprobado en 2006 y ratificado en referéndum por los ciudadanos en 2006, pero este no es el vigente; el Estado y el Tribunal Constitucional decidieron recortarlo con la sentencia en 2010 con un redactado que no era el votado por el pueblo de Catalunya en referéndum, perdió su legitimidad. El Gobierno del Estado ha ignorado el malestar mostrado por cientos de miles de personas manifestándose durante siete años, al contrario, ha reforzado la política opuesta, recentralización, reducción de competencias y alta agresividad contra las instituciones de Catalunya, llevando sus relaciones con Catalunya a una situación de extraordinaria gravedad.
2. Que el pasado 1 de octubre el referéndum celebrado en Catalunya dio un resultado claro: más de dos millones de catalanes encomendaron al Parlament el mandato democrático de declarar la independencia. A la voluntad de diálogo, manifestada de forma incansable, por parte del Govern de Catalunya, el Gobierno del Estado ha respondido con una solicitud de aplicación de medidas tremadamente agresivas para la suspensión de la autonomía de Catalunya, que no puede aceptarse.
3. Que son el diálogo y la política las únicas vías de encuentro en el futuro de Catalunya y de España. Por lo que, en la nueva etapa que emprende Catalunya, el diálogo, la política –y no la represión– deben configurar el marco democrático de negociación, en beneficio de España y de Catalunya.

JUSTIFICACIÓN

Las medidas propuestas por el Consejo de Ministros al Senado pretenden cortar violentamente, desde el Estado, las decisiones políticas del Govern y del Parlament de Catalunya sin abordar la raíz del problema que no es otro



que el rechazo de una mayoría de los ciudadanos de Catalunya a la vigente relación política, administrativa y económica de Catalunya con el Estado. El Govern y el Parlament de Catalunya no están actuando por libre, son los legítimos representantes de los catalanes y los depositarios de sus mandatos y de sus votos. Hay que recordar de nuevo que el Estatut de Catalunya vigente no es el que ratificaron democráticamente en Referéndum el año 2006 los ciudadanos de Catalunya, sino que es otro Estatut, es aquel Estatut recortado y modificado por la Sentencia del TC de 2010, es un Estatut que Catalunya nunca ha sentido suyo y que no es fiel al pacto alcanzado entre el Parlament y las Cortes Generales. La desafección, el descontento y el rechazo respecto a la actitud del Gobierno del Estado y como consecuencia de la Sentencia del Estatut y de esta actitud, no ha parado de crecer en Catalunya.

Para dar respuesta a esta situación, quien ha tenido más poder en la gestión de la soberanía política del Estado, el Gobierno estatal, es quien tiene también más responsabilidades para hacer propuestas y para dar respuestas a esta situación, sin embargo no las ha ejercido. Las manifestaciones de cientos de miles de personas en Catalunya, un año tras otro, manifestando su rechazo a la relación establecida, sólo han recibido desprecio, desconsideración y rechazo por parte de las autoridades del Estado. Ha sido un comportamiento frívolo del Gobierno estatal, como lo son también las medidas que propone al Senado, pues pretenden cortar violentamente, antidemocráticamente, constitucionalmente, antiestatutariamente la autonomía de Catalunya decapitar el Govern de Catalunya y el Parlament y, lo más vergonzoso, sin abordar mediante el diálogo y la negociación política la raíz del problema.

Bajo estas circunstancias y atendiendo a los resultados del referéndum del 1 de octubre, y a la nula voluntad de diálogo y negociación política mostrada por el Gobierno estatal, las instituciones catalanas deben decidir su futuro.

Por lo cual, constatando lo negativo e irresponsable de las negativas al diálogo y la negociación política como marco de resolución de conflictos tan graves como los que ha conllevado el recurso al Estatut y la correspondiente Sentencia del Tribunal Constitucional, casi cuatro años después de haber sido ratificado por los ciudadanos, es preciso que en la nueva etapa que emprende Catalunya, el diálogo -y no la represión- sean el marco de negociación, en beneficio de España y de Catalunya.



VOTO PARTICULAR Num. 2

DE MODIFICACIÓN DEL APARTADO II

Redacción que se propone:

El Senado considera que no procede la aprobación de las medidas incluidas en el Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017.

JUSTIFICACIÓN

Desde la perspectiva global y en la particularidad de la mayoría de ellas, la autorización que pide el Consejo de Ministros va mucho más allá de lo que puede admitir el artículo 155 de la CE y el artículo 189 del Reglamento del Senado.

En derecho comparado, cuando se permite aplicar una medida tan excepcional como destituir a un Gobierno o quitar soberanía a un Parlamento autonómico ello se dice expresamente en la Constitución. Así ocurre en las constituciones de Portugal, Austria e Italia. En España se propuso y no se incorporó, por tanto, hay que entender que quedó excluida esta posibilidad.

El art. 155 CE prevé en su apartado 1, que el Senado pueda aprobar "las medidas necesarias" para obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de aquellas obligaciones que le impongan la Constitución u otras leyes o para la protección del interés general.

En el apartado 2 del mismo artículo 155 queda acotado el concepto de "las medidas necesarias" y establece que "para ejecutarlas podrá dar instrucciones" a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas".

Más específico es todavía el artículo 189 del Reglamento del Senado (RS), cuando precisa que en los casos previstos en el artículo 155.1 de la Constitución, si el Gobierno requiere la aprobación del Senado, deberá presentar a la Cámara escrito en el que "se manifieste el contenido y alcance de las medidas propuestas".

En consecuencia, una lectura conjunta de ambos artículos permitiría señalar que: el Senado podrá aprobar "las medidas necesarias" y, "para ejecutarlas podrá dar instrucciones" a todas las autoridades de la



Comunidad Autónoma, pero el escrito presentado en el Senado manifestará "el contenido y alcance de las medidas propuestas".

El artículo 155 CE se configura como una norma excepcional, pero en el mismo apartado 2 del artículo y conjuntamente interpretado con el artículo 189 del Reglamento de la Cámara, se especifica que las medidas que puede autorizar el Senado deben quedar limitadas a dar instrucciones a cualquiera de las autoridades de la Comunidad Autónoma, respecto a unas medidas de las que el Senado debe conocer el contenido y alcance, teniendo en cuenta que bajo el concepto "alcance" está, el alcance temático y la alcance temporal. Ni es un cheque en blanco para el Gobierno estatal, ni puede ir más allá de lo que la propia Constitución regula, ni puede ir más allá de lo regulado en el Estatut, ni permite ir más allá de "dar instrucciones", ni el mandato puede ser genérico, ni puede conllevar consecuencias temporalmente indefinidas. Definitivamente, no es una cláusula de plenos poderes del Gobierno estatal.

Respecto la PROPUESTA A), DE MEDIDAS DIRIGIDAS AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL VICEPRESIDENT Y EL CONSEJO DE GOBIERNO

- Son medidas que rebasan ampliamente la autorización que puede hacer el Senado al Gobierno estatal, caen en la inconstitucionalidad, son contrarias al Estatut y a las propias capacidades del Senado para otorgarlas. En el debate de redacción de la Constitución se rechazó dos veces la posibilidad de que el Gobierno del Estado pudiera disolver un Parlamento autonómico o destituir un gobierno. Si el constituyente negó explícitamente la introducción de esta posibilidad, fue porque dentro del artículo 155 no cabe esta opción.
- La autorización al Gobierno estatal a cesar al President de la Generalitat, al Vicepresidente ya todo el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Catalunya y la sustitución de todas las funciones que estatutaria, legal y normativamente les son propias, transfiriendo estas funciones a los órganos o autoridades que determine el Gobierno estatal equivale a la sustitución de un Govern elegido democráticamente por los catalanes, por un órgano de gobierno dependiente directamente del Gobierno estatal y nada representativo de la voluntad de los ciudadanos. Con esta decisión elimina totalmente el principio de autonomía política reconocido en el art. 2, al 147 y al 152 de la CE y al propio Estatut de autonomía de Catalunya.



- Es una medida no democrática, hecha de espaldas y contra los electores. El Gobierno estatal hoy está gobernado en minoría por el Partido Popular y, en Catalunya, es la quinta fuerza política en el Parlament. De aprobarse, permitiría al PP gobernar la Generalitat, es un sin sentido absolutamente opuesto a la democracia, a la Constitución y al marco estatutario que las medidas propuestas -dicen- que pretenden restablecer.
- Profundizando en esta medida tan trascendente, señalar que cesar el President de la Generalitat y los miembros de su Gobierno sería una injerencia no prevista en el EAC y una quiebra de la relación de confianza política entre los representantes electos del pueblo de Catalunya y el de su Gobierno. Esta relación de confianza es la esencia del sistema democrático de gobierno, ya que es la fuente de legitimidad democrática de las instituciones. Si no son representativas, no son democráticas.
- Además, se priva al President, Vicepresident y Consejeros, del ejercicio de su derecho fundamental al ejercicio del cargo (art. 23 CE) por el que han sido investidos y designados, y se altera la regulación prevista en el art. 152 de la Constitución española y en el EAC de las causas de cese y de no ser cesados por ninguna otra causa no prevista en estas disposiciones y en la legislación catalana que las ha desarrollado.
- Sería una alteración del orden constitucional y estatutario y, en definitiva, de todo el sistema de instituciones de la Generalitat, teniendo en cuenta que el President es el depositario de la confianza del Parlament de Catalunya, y que ha sido investido para representar al conjunto del pueblo y las instituciones de Catalunya. Sólo el Parlament puede cesar al President de la Generalitat.
- Dicha autorización tiene unos efectos generalizados, ya que afecta a todo el Govern de la Generalitat y a todas las unidades y servicios de la Generalitat. No es admisible, constituiría un cheque en blanco para las actuaciones del Gobierno estatal en Catalunya, cuestión ésta que en ningún caso avala el art.155 CE y el arte. 67 del Estatut.
- Sus efectos son indefinidos, una vez cesado el President y los miembros del Govern no resulta posible que recuperen su lugar, aspectos que no se ajustan en absoluto a lo especificado en el arte 189 del Reglamento del Senado, cuando determina que "se manifieste el contenido y alcance de las medidas propuestas".



- La medida de transferir al Presidente del Gobierno estatal la facultad de disolver el Parlament de Catalunya y convocar elecciones catalanas, en el plazo de 6 meses (cuestión sobre la que la Vicepresidenta del Gobierno ya ha señalado que se podría pedir prorrogar este plazo) contradice frontalmente el principio de autonomía política de la Generalitat reconocido el arte. 2, art. 147 y arte. 152 CE, así como el art. 75 del EAC. Otorgar al Presidente del Gobierno estatal la capacidad de disolver el Parlament, órgano estatutario de elección directa y que es el representante de la ciudadanía de Catalunya, es una medida que sobrepasa ampliamente lo que determina el art. 151.2 de "dar instrucciones". Aprobar esta medida equivaldría de nuevo a otorgar un cheque en blanco al Gobierno estatal.
- Adicionalmente, señalar que la interpretación del artículo 155 de la CE debe hacerse en base a todo el debate que hubo antes de su ratificación por las Cortes constituyentes. Así al anteproyecto de la Constitución se presentó un voto particular de Manuel Fraga de Alianza Popular, al Título VIII donde proponía lo siguiente:

"Artículo décimo segundo

- 1. En casos graves, el Gobierno podrá acordar la intervención de una región autónoma, dando cuenta inmediata a las Cortes.*
- 2. Las medidas de intervención pueden comprender:*
 - a) La suspensión de uno o más órganos de la región.*
 - b) La designación de un Gobernador general, con poderes extraordinarios.*
- 3. La intervención deberá acordarse por Decreto motivado, y dar lugar automáticamente a un debate sobre la cuestión de confianza en el Congreso.*
- 4. El Decreto ha de especificar el plazo de la intervención, conectándolo con una convocatoria electoral.*
- 5. Si fuese necesario la declaración de alguno de los estados de excepción previstos en el Título XI, no podrán celebrarse elecciones antes de su levantamiento."*

Fue voluntad explícita de los legisladores que aprobaron la Constitución rechazar en el Pleno del Congreso el voto particular que pretendía incorporar esta disposición. La cual, en buena parte, es la que pretende incorporar ahora por la puerta de atrás el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre sobre la aplicación del art. 155 CE. No es admisible por tanto en la Constitución que el art. 155 permita



el cese del Presidente y de los Consejeros de la Generalitat y la asunción de sus funciones por parte de un órgano nombrado por el Gobierno estatal.

- El Gobierno estatal pretende decapitar el Govern de Catalunya y el Parlament por ser fiel a lo que han pedido los votantes y por haberse sublevado contra la desleal Sentencia que recortó el Estatut pactado y luego ratificado por los catalanes.
- A la vez, las medidas propuestas premian la inactividad y la insensibilidad política del Estado hacia Catalunya. Así otorgan al mismo Gobierno estatal todo el poder político, económico y administrativo de la Generalitat y anulan el Parlament. Es muy fuerte, incomprensible, en un estado de derecho. Se premia la incapacidad política del Gobierno estatal del Partido Popular, su incapacidad de diálogo, de ofrecer propuestas, de ofrecer un proyecto de futuro para España y de dejar construir un proyecto de futuro a los catalanes.
- Las medidas que el Consejo de Ministros propone al Senado no son medidas de construcción, sino de destrucción; no persiguen una mejora de la convivencia, al contrario, buscan romper la convivencia que Catalunya ha sabido alcanzar; no persiguen fortalecer la economía y el crecimiento económico, al contrario, buscan limitar, tal como se ha demostrado con la vergonzosa campaña institucional del Gobierno del Estado para hacer cambiar sedes sociales de empresas catalanas hacia el exterior, o como se ha demostrado con la igualmente vergonzosa intervención de la Generalitat, bloqueando partidas presupuestarias de entidades sociales, de ayudas rurales y mucho otros, con el detestable objetivo de detener violentamente la voluntad de los catalanes, primero a hacer un referéndum y de autogobernarse. No es eso lo que necesita Catalunya y no es eso lo que necesita España. No es este el Gobierno estatal que Catalunya y España se merecen.
- Frente a las medidas que pretende aprobar el Senado en aplicación del art. 155 CE, se puede considerar que la vía de impugnación jurisdiccional del acuerdo adoptado por el Senado, por el que se ha autorizado al Gobierno del Estado a adoptar medidas respecto de la Generalitat, podría ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad ante el TC, en el plazo de 3 meses y previo dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que dispone de un mes para emitir su dictamen. Estarían legitimados para formular el recurso el Parlament de Catalunya y el Govern de la Generalitat. Si el cese del Govern de la



Generalitat y el veto a las iniciativas del Parlament se hacen efectivos, no habría ningún sujeto legitimado para plantear este recurso.

- En cuanto a las medidas que efectivamente termine adoptando el Gobierno del Estado o las autoridades designadas por él para dar instrucciones o actuar en sustitución de las de la Generalitat, podrán ser objeto de conflicto de competencia ante el TC, previo requerimiento de incompetencia al Gobierno del Estado (que dispone de un mes para darles respuesta), y del preceptivo dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. El órgano legitimado para formular el requerimiento previo y el conflicto sería el Govern de la Generalitat. Por lo tanto igualmente en este caso, el cese del Govern de la Generalitat impediría efectivamente esta vía de impugnación.
- Asimismo, toda vez que las medidas adoptadas por las autoridades estatales, intervencionistas, serían medidas administrativas, aunque adoptadas a unas circunstancias extraordinarias, podrían ser impugnadas ante los órganos judiciales del orden contencioso-administrativo, si así lo acordaran los Consejeros respectivos. Igualmente, por tanto, esta vía de impugnación quedaría limitada por las instituciones estatales.
- Esta inviabilidad de la impugnación de las medidas demuestra también su inconstitucionalidad, ya que deja a los actos del Estado sin ningún control jurisdiccional y vulnera el derecho fundamental de la Generalitat de Catalunya a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).
- En definitiva, las medidas que el Gobierno estatal pide al Senado no se ajustan a lo establecido en el artículo 155 CE y al artículo 189 del reglamento del Senado, sino que pretenden obtener un "cheque en blanco", de entrada para convocar nuevas elecciones al Parlament de Catalunya en 6 meses, plazo que previa solicitud al Senado, donde el Gobierno estatal del partido popular tiene mayoría absoluta, podrían prolongar. Un cheque en blanco de medidas que son anticonstitucionales y antiestatutarias.
- No se puede pretender afirmar que se quiere "reponer la legalidad constitucional y estatutaria vulnerada" con un conjunto de medidas claramente inconstitucionales y, evidentemente anti estatutarias, ya que sustituyen el Govern democrático de Catalunya por un órgano de Gobierno no democrático y no previsto en el Estatut ni en ninguna parte.



- Tampoco se puede pedir autorización al Senado para la adopción de un conjunto de medidas omnipoentes, empezando por la destitución de todo el Govern de la Generalitat, la suspensión de la autonomía y la práctica eliminación de funciones en el Parlament, cuando el Senado precisa en el art.189 de su Reglamento que, si el Gobierno decidiera aplicar el art.155 CE, debería presentarle, para su aprobación, unas medidas acotadas a un determinado contenido y alcance. Es evidente que tampoco el Senado puede incumplir su propia normativa.
- De ser aprobadas las medidas propuestas por el Gobierno estatal al Senado y, particularmente las previstas en este bloque, el día de su entrada en vigor Catalunya pasaría de ser una democracia a ser una dictadura. Las medidas permiten al Gobierno estatal destituir a la totalidad del Govern de la Generalitat, limitar la casi totalidad de las competencias del Parlament, ambos elegidos democráticamente, y actuar al margen de la Constitución, del Estatut y de la preservación de derechos fundamentales. Asimismo pretenden obtener por el Gobierno del Estado carta blanca para incumplir todo tipo de normas e incluso leyes relativas al funcionamiento de la Generalitat.

Respecto a LA PROPUESTA B) DE MEDIDAS DIRIGIDAS A LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT

- Las medidas propuestas, dirigidas a la administración de la Generalitat, están vinculadas a la principal: destituir todo el Govern de la Generalitat y silenciar el Parlament. Por lo tanto no están limitadas a "dar instrucciones", ni limitadas a un "contenido" y "alcance" concreto, en consecuencia, en el contexto del arte 155 CE y del arte. 189 RS son inadmisibles en sí mismas. Pero además su concreción aún ratifica más su alcance universal sobre todos los órganos de la administración de la Generalitat y su personal, lo que ratifica que son medidas de sustitución de la Generalitat por el Gobierno estatal, en vez de ser instrucciones con un contenido y alcance limitado.
- Otorgar la facultad, a los órganos y autoridades creadas o designadas por el Estado, de dirigir y dar instrucciones a toda la Administración de la Generalitat, conlleva la suspensión de la autonomía y la asunción de todas las competencias autonómicas por el Gobierno estatal, que no se puede justificar en el art. 155 de la Constitución, que sólo habilitaría para la adopción de medidas concretas. Además, la extensión de esta facultad a todos los servicios públicos, las unidades y sectores de la



Administración de la Generalitat, no es compatible con el carácter concreto y específico de las medidas que podrían tener cobijo en el art. 155 de la Constitución y en el artículo 189 del Reglamento del Senado.

- Lo mismo se puede afirmar de la capacidad de acordar el nombramiento, cese o sustitución de cualquier autoridad, cargo público o personal de la Administración de la Generalitat y de sus organismos, entes y sector público vinculado.
- Someter a un régimen de comunicación o autorización previa de todas las actuaciones de la Generalitat, sin acotar contenidos ni alcance, sobre pasa de nuevo lo que determinan el art. 155CE y el 189 RS
- No es admisible tampoco que a través de esta vía el Gobierno estatal pretenda adoptar medidas disciplinarias más allá de las existentes en la legislación vigente.

Respecto a LA PROPUESTA C) DE MEDIDAS SINGULARES SOBRE DETERMINADOS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

- Seguridad y orden público. El funcionamiento del Cuerpo de la Policía de la Generalitat de Catalunya Mossos d'Esquadra ha demostrado en su existencia su compromiso de servicio, eficacia, eficiencia y proporcionalidad de actuación en la defensa de la seguridad. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, garantiza la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Autónoma en Catalunya mediante la Junta de Seguridad, la cual, en el pasado, no siempre pudo operar como debía, pero no por causa de la Generalitat, sino del Gobierno estatal. El temor de los ciudadanos de Catalunya es que con esta medida se incremente exponencialmente la tensión y la violencia en la calle con participación de fuerzas de seguridad, tal como ocurrió el día 1 de octubre con las fuerzas de seguridad del Estado.
- Área de gestión económica, financiera, tributaria y presupuestaria. Las medidas propuestas en este caso son específicas, si bien no lo son las ya adoptadas anteriormente en la Orden HFP / 878/2017, de 15 de septiembre, por la que el Ministerio de Hacienda intervino totalmente las cuentas de la Generalitat, una medida que ha paralizado buena parte de la actividad económica pública de la Generalitat, a pesar de corresponder a presupuestos legalmente aprobados y afectar a múltiples áreas que no tienen nada que ver respecto si hay o no un



proceso independentista de Catalunya. Una cosa es imponer a la Comunidad Autónoma la elaboración de un plan o la comprobación de su idoneidad para alcanzar unos determinados objetivos, y otra, bien distinta, sustituir la competencia autonómica para adoptar sus propias políticas.

- Área de telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas y audiovisuales. Las medidas propuestas sobre telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas pretenden de nuevo tener un alcance universal de actuación sobre unos instrumentos que afectan a toda la Generalitat, no son por tanto medidas dirigidas con un contenido y alcance determinado, como exige el art.189 RS.
- En cuanto al control audiovisual, es evidentemente una medida demagógica, pues la política relativa a los medios públicos de comunicación de Catalunya es más transparente y objetiva que la de los medios públicos estatales. El Consejo de Informativos de TVE ha publicado un duro y detallado informe de 72 páginas en el que cargan contra la cobertura que ha llevado a cabo la cadena pública durante la crisis en Catalunya y su manipulación.

Respecto a LA PROPUESTA D) MEDIDAS DIRIGIDAS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

Las medidas propuestas por el Consejo de Ministros al Senado relativas a la supresión y limitación de las facultades del Parlament de Catalunya, dejándolo prácticamente con la sola función representación, es un ataque a la democracia que desnaturaliza el carácter representativo de la Cámara y vulnera el derecho fundamental, reconocido en el art. 23 CE, al ejercicio de sus cargos parlamentarios de los diputados y diputadas del Parlament de Catalunya. Es una vulneración flagrante del Estatut que la propuesta de medidas propuestas por el Gobierno en el Senado dice que quiere hacer cumplir.

- Respecto que la Presidenta del Parlament no podrá proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat ni convocar el debate de investidura de un nuevo Presidente, desnaturaliza el carácter de sistema parlamentario del Govern que garantiza el art. 152 de la Constitución española, que fue una de las condiciones básicas del pacto constituyente hacia Catalunya y, en el mismo sentido,



vulnera igualmente las previsiones correspondientes del EAC (art 55 EAC).

- Respecto de la transferencia, al órgano de control que determine el Senado, de la función de control parlamentario del ejecutivo y de la administración en Catalunya, priva al Parlament de Catalunya de una de sus funciones esenciales que legitima democráticamente al Govern y a la su dirección política de la Administración de la Generalitat.
- Respecto de la limitación de las funciones de impulso parlamentario de la acción del Govern, y la introducción de un período de un mes para la tramitación de iniciativas parlamentarias con la facultad de voto dentro de este mes por parte del Gobierno del Estado, son medidas que desnaturalizan igualmente la función parlamentaria de la cámara catalana. Cabe recordar que ya en los debates constituyentes en 1978 se rechazó la posibilidad de introducir en la Constitución española esta facultad de voto estatal a las leyes autonómicas. Por ello, reintroducirla ahora es contrario al espíritu mismo de la Constitución española.

Se puede concluir que estas medidas privan al Parlament de todas las funciones esenciales que lo definen como cámara parlamentaria, la electiva del President, la de control e impulso del Gobierno y la función legislativa.

Además, en su conjunto, estas medidas afectan a las principales instituciones del autogobierno de Catalunya y comportan, de hecho, la suspensión de su autonomía política.

Frente a las medidas que pretende aprobar el Senado en aplicación del art. 155 CE, se puede considerar que la vía de impugnación jurisdiccional del acuerdo adoptado por el Senado, por el que se ha autorizado al Gobierno del Estado a adoptar medidas respecto de la Generalitat, podría ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad ante el TC, en el plazo de 3 meses y previo dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que dispone de un mes para emitir su dictamen. Estarían legitimados para formular el recurso el Parlament de Catalunya y el Govern de la Generalitat. Si el cese del Govern de la Generalitat y el voto a las iniciativas del Parlament se hacen efectivos, no habría ningún sujeto legitimado para plantear este recurso.



Esta inviabilidad de la impugnación de las medidas demuestra también su inconstitucionalidad, ya que deja a los actos del Estado sin ningún control jurisdiccional y vulnera el derecho fundamental de la Generalitat de Catalunya a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

En definitiva, las medidas que el Gobierno estatal pide al Senado no se ajustan a lo establecido en el artículo 155 CE y al artículo 189 del reglamento del Senado, sino que pretenden obtener un "cheque en blanco", de entrada para convocar nuevas elecciones al Parlamento de Catalunya en 6 meses, plazo que, previa solicitud al Senado donde el Gobierno estatal del partido popular tiene mayoría absoluta, podrían prolongar. Un cheque en blanco de medidas que son anticonstitucionales y antiestatutarias.

No se puede pretender afirmar que se quiere "reponer la legalidad constitucional y estatutaria vulnerada" con un conjunto de medidas claramente inconstitucionales y, evidentemente anti estatutarias, ya que sustituyen el Gobierno democrático de Catalunya por un órgano de Gobierno no democrático y no previsto en el Estatut ni en ninguna parte.

Respecto a LA PROPUESTA E) DE MEDIDAS DE CARACTER TRANSVERSAL

Las medidas propuestas por el Consejo de Ministros al Senado de carácter transversal tienen como objetivo cerrar el círculo de la sustitución de la autonomía de la Generalidad de Cataluña -incluyendo el Parlament- por la dependencia del Gobierno estatal. De nuevo son medidas que bajo el adjetivo de "transversales" pretenden dar un carácter universal a la dependencia administrativa de la totalidad de órganos de la Generalitat respecto al Gobierno estatal o el órgano que éste determine. También en este caso son medidas que no se ajustan a los límites, que los hay, para la aplicación del art. 155 CE y del art. 189 RS.

- No resulta admisible en un entorno de respeto a la legalidad, el otorgamiento ilimitado al Gobierno estatal de capacidades "de organización, creación, modificación y extinción de aquellos organismos y entidades públicas creadas o autorizadas por ley ". Una cosa es otorgar capacidades para "dar instrucciones" a los organismos y entidades públicas y una muy diferente es otorgar carta blanca al



Gobierno para llegar a "extinguir" organismos que han sido creados por ley.

- Idéntica consideración merecen las disposiciones destinadas a dar seguridad jurídica a las decisiones que adopten los órganos que determine el Gobierno estatal.
- La disposición E9, de mantener las disposiciones vigentes hasta la toma de posesión del nuevo Govern de la Generalitat, después de unas elecciones al Parlament que cambien la actual mayoría parlamentaria manifiesta explícitamente que este es un golpe de Estado a las instituciones catalanas con el solo objetivo de modificar su composición.
- De ser aprobadas las medidas propuestas por el Gobierno estatal al Senado y, particularmente las previstas en este bloque, el día de su entrada en vigor Catalunya pasaría de ser una democracia a ser una dictadura. Las medidas permiten al Gobierno estatal destituir a la totalidad del Govern de la Generalitat, limitar la casi totalidad de las competencias del Parlamento, ambos elegidos democráticamente, y actuar al margen de la Constitución, del Estatut y de la preservación de derechos fundamentales. Asimismo pretenden obtener por el Gobierno del Estado carta blanca para incumplir todo tipo de normas e incluso leyes relativas al funcionamiento de la Generalitat.



VOT PARTICULAR Num. 1

DE MODIFICACIÓ DE L'APARTAT I

Redacció que es proposa:

El Senat constata:

1. Que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, com a Pacte entre el Parlament de Catalunya i les Corts Generals va ser aprovat el 2006 i ratificat en referèndum pels ciutadans el 2006, però aquest no és el vigent; l'Estat i el Tribunal Constitucional van decidir retallar-lo amb la Sentència el 2010, amb un redactat que no era el votat pel poble de Catalunya en referèndum, va perdre la seva legitimitat. El Govern de l'Estat ha ignorat el malestar mostrat per centenars de milers de persones manifestant-se durant set anys, al contrari, ha reforçat la política oposada: recentralització, reducció de competències i alta agressivitat contra les institucions de Catalunya, portant les seves relacions amb Catalunya a una situació d'extraordinària gravetat.
2. Que el passat 1 d'octubre el referèndum celebrat a Catalunya va donar un resultat clar: més de dos milions de catalans van encomanar al Parlament el mandat democràtic de declarar la independència. A la voluntat de diàleg, manifestada de manera incansable, per part del Govern de Catalunya, el Govern de l'Estat ha respost amb una sol·licitud d'aplicació de mesures tremendament agressives per a la suspensió de l'autonomia de Catalunya, que no pot acceptar-se.
3. Que en el futur, són el diàleg i la política les úniques vies de trobada entre Catalunya i d'Espanya. Perquè, en la nova etapa que emprèn Catalunya, el diàleg, la política -i no la repressió- han de configurar el marc democràtic de negociació, en benefici d'Espanya i de Catalunya.

JUSTIFICACIÓ

Les mesures proposades pel Consell de Ministres al Senat prenen tallar violentament, des de l'Estat, les decisions polítiques del Govern i del Parlament de Catalunya sense abordar l'arrel del problema que no és altre que el rebuig d'una



majoria dels ciutadans de Catalunya a la vigent relació política, administrativa i econòmica de Catalunya amb l'Estat. El Govern i el Parlament de Catalunya no estan actuant per lliure, són els legítims representants dels catalans i els dipositaris dels seus mandats i dels seus vots. Cal recordar de nou que l'Estatut de Catalunya vigent no és el que van ratificar democràticament en Referèndum l'any 2006 els ciutadans de Catalunya, sinó que és un altre Estatut, és aquell Estatut retallat i modificat per la Sentència del TC de 2010, és un Estatut que Catalunya mai ha sentit seu i que no és fidel al pacte assolit entre el Parlament i les Corts Generals. La desafecció, el descontentament i el rebuig respecte a l'actitud del Govern de l'Estat i com a conseqüència de la Sentència de l'Estatut i d'aquesta actitud, no ha parat de créixer a Catalunya.

Per donar resposta a aquesta situació, qui ha tingut més poder en la gestió de la sobirania política de l'Estat, el Govern estatal, és qui té també més responsabilitats per fer propostes i per donar respostes a aquesta situació, però no les ha exercit. Les manifestacions de centenars de milers de persones a Catalunya, un any rere l'altre, manifestant el seu rebuig a la relació establerta, només han rebut menyspreu, desconsideració i rebuig per part de les autoritats de l'Estat. Ha estat un comportament frívol del Govern estatal, com ho són també les mesures que proposa al Senat, ja que pretenen tallar violentament, antidemocràticament, inconstitucionalment, antiestatutariament l'autonomia de Catalunya, decapitar el Govern de Catalunya i al Parlament i, el més vergonyós, sense abordar mitjançant el diàleg i la negociació política l'arrel del problema.

Sota aquestes circumstàncies i atenent als resultats del referèndum de l'1 d'octubre, i a la nul·la voluntat de diàleg i negociació política mostrada pel Govern estatal, les institucions catalanes han de decidir el seu futur.

Per la qual cosa, constatant el caràcter negatiu i irresponsable de les negatives al diàleg i a la negociació política, com a marc de resolució de conflictes tan greus com els que ha comportat el recurs a l'Estatut i la corresponent Sentència del Tribunal Constitucional, gairebé quatre anys després d'haver estat ratificat pels ciutadans, cal que en la nova etapa que emprèn Catalunya, el diàleg -i no la repressió- siguin el marc de negociació, en benefici d'Espanya i de Catalunya.



VOT PARTICULAR Num. 2

DE MODIFICACIÓ DE L'APARTAT II

Redacció que es proposa:

El Senat considera que no procedeix l'aprovació de les mesures incloses en l'Acord adoptat pel Consell de Ministres de 21 d'octubre de 2017.

JUSTIFICACIÓ

Des de la perspectiva global i en la particularitat de la majoria d'elles, l'autorització que demana el Consell de Ministres va molt més enllà del que pot admetre l'article 155 de la CE i l'article 189 del Reglament del Senat

En dret comparat, quan es permet aplicar una mesura tan excepcional com destituir un Govern o treure sobirania a un Parlament autonòmic es diu expressament a la Constitució. Així passa a les constitucions de Portugal, Àustria i Itàlia. A l'estat espanyol es va proposar i no es va incorporar, per tant, cal entendre que va quedar exclosa aquesta possibilitat

L'art. 155 CE preveu en el seu apartat 1, que el Senat pugui aprovar "les mesures necessàries" per obligar a una Comunitat Autònoma al compliment forçós d'aquelles obligacions que l'hi imposen la Constitució o altres lleis o per la protecció de l'interès general.

En l'apartat 2 del mateix article 155 queda acotat el concepte de "les mesures necessàries" i estableix que "per executar-les podrà donar instruccions" a totes les autoritats de les Comunitats Autònombes".

Més específic és encara l'article 189 del Reglament del Senat (RS), quan precisa que en els casos que preveu l'article 155.1 de la Constitució, si el Govern requerís l'aprovació del Senat, ha de presentar a la Cambra escrit en el qual "es manifesti el contingut i abast de les mesures proposades".

En conseqüència, una lectura conjunta d'ambdós articles permetria senyalar que: el Senat podrà aprovar "les mesures necessàries" i, "per executar-les podrà donar instruccions" a totes les autoritats de la Comunitat Autònoma, però l'escript presentat al Senat ha de manifestar "el contingut i abast de les mesures proposades".



L'article 155 CE es configura com una norma excepcional, però en el mateix apartat 2 de l' article i conjuntament interpretat amb l'article 189 del Reglament de la Cambra, s'especifica que les mesures que pot autoritzar el Senat han de quedar limitades a donar instruccions a qualsevol de les autoritats de la Comunitat Autònoma, respecte unes mesures de les quals el Senat n'ha de conèixer el contingut i l'abast, tenint en compte que sota el concepte "abast", hi ha l'abast temàtic i l'abast temporal. Ni és un xec en blanc pel Gobierno estatal, ni pot anar més enllà del que la mateixa Constitució regula, ni pot anar més enllà del regulat a l'Estatut, ni permet anar més enllà de "donar instruccions", ni el mandat pot ser genèric, ni pot comportar conseqüències temporalment indefinides. Definitivament, no és una clàusula de plens poders i Gobierno estatal.

Respecte la PROPOSTA A), DE MESURES DIRIGIDES AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, el vicepresident i EL CONSELL DE GOVERN

- Són mesures que depassen, de molt, l'autorització que pot fer el Senat al Gobierno estatal, cauen en la inconstitucionalitat, són contraries a l'Estatut i a les pròpies capacitats del Senat per atorgar-les. En el debat de redacció de la Constitució es va rebutjar dues vegades la possibilitat de que el Govern de l'Estat pugui dissoldre un Parlament autonòmic o destituir un govern. Si el constituent va negar introduir explícitament aquesta possibilitat va ser perquè dins l'article 155 no hi cap aquesta opció.
- L'autorització al Govern estatal a cessar al President de la Generalitat, al Vicepresident i a tot el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya i la substitució de totes les funcions que estatutària, legal i normativament els hi són pròpies, transferint aquestes funcions als òrgans o autoritats que determini el Govern estatal equival a la substitució d'un govern elegit democràticament pels catalans, per un òrgan de govern dependent directament del Gobierno estatal i gens representatiu de la voluntat dels ciutadans. Amb aquest decisió elimina totalment el principi d'autonomia política reconegut a l'art. 2, al 147 i al 152 de la CE i al propi Estatut d'autonomia de Catalunya.
- És una mesura no democràtica, feta d'esquesnes i contra els electors. El Gobierno estatal avui està governat en minoria pel Partido Popular i, a Catalunya, és la cinquena força política en el Parlament. Daprovar-se, permetria al PP governar la Generalitat, és un sense sentit absolutament oposat a la democràcia, a la



Constitució i al marc estatutari que les mesures proposades –diuen- que prenenen restablir.

- Aprofundint en aquesta mesura tan transcendent, senyalar que cessar el President de la Generalitat i els membres del seu Govern seria una ingerència no prevista a l'EAC i un trencament de la relació de confiança política entre els representants electes del poble de Catalunya i el seu Govern. Aquesta relació de confiança és la essència del sistema democràtic de govern, ja que és la font de legitimitat democràtica de les institucions. Si no són representatives, no són democràtiques.
- A més, es priva al President, Vicepresident i Consellers, de l'exercici del seu dret fonamental a l'exercici del càrrec (art. 23 CE) pel qual han estat investits i designats, i s'altera la regulació prevista a l'art. 152 de la Constitució espanyola i a l'EAC de les causes de cessament i a no ser cessats per cap altra causa no prevista en aquestes disposicions i en la legislació catalana que les ha desenvolupat.
- Seria una alteració de l'ordre constitucional i estatutari i, en definitiva, de tot el sistema d'institucions de la Generalitat, tenint en compte que el President és el depositari de la confiança del Parlament de Catalunya, i que ha estat investit per a representar al conjunt del poble i les institucions de Catalunya. Només el Parlament pot cessar al President de la Generalitat.
- L'esmentada autorització té uns efectes generalitzats, ja que afecta a tot el Govern de la Generalitat, a totes les unitats i serveis de la Generalitat. No és admissible, constituiria un xec en blanc per a les actuacions del Gobierno estatal a Catalunya, qüestió aquesta que en cap cas avala l'art.155 CE i l'art. 67 de l'Estatut.
- Els seus efectes són indefinits, un cop cessat el President i els membres del Govern no resulta possible que recuperin el seu lloc, aspectes que no s'ajusten en absolut al que especifica l'art 189 del Reglament del Senat, quan determina que “es manifesti el contingut i abast de les mesures proposades”.
- La mesura de transferir al President del Gobierno estatal la facultat de dissoldre el Parlament de Catalunya i convocar eleccions catalanes, en el termini de 6 mesos (qüestió sobre la qual la Vicepresidenta del Gobierno ja ha assenyalat que es podria demanar prorrogar aquest termini) contradiu frontalment el principi d'autonomia política de la Generalitat reconegut al art. 2, art. 147 i art. 152 CE, així com l'art. 75 de l'EAC. Atorgar al President del Gobierno estatal la capacitat de dissoldre el Parlament, òrgan estatutari d'elecció directa i que és el representant de la ciutadania de Catalunya, és una mesura que sobrepassa abastament el que



determina l'art.151.2 de "donar instruccions". Aprovar aquesta mesura equivaldria de nou a atorgar un xec en blanc al Gobierno estatal.

- Addicionalment, consignar que la interpretació de l'article 155 de la CE s'ha de fer en base a tot el debat que hi va haver abans de la seva ratificació per les Corts constituents. Així a l'avantprojecte de la Constitució hi va haver un vot particular de Manuel Fraga de Alianza Popular, al Títol VIII on proposava el següent:

"Artículo décimo segundo

1. *En casos graves, el Gobierno podrá acordar la intervención de una región autónoma, dando cuenta inmediata a las Cortes.*
2. *Las medidas de intervención pueden comprender:*
 - a) *La suspensión de uno o más órganos de la región.*
 - b) *La designación de un Gobernador general, con poderes extraordinarios.*
3. *La intervención deberá acordarse por Decreto motivado, y dar lugar automáticamente a un debate sobre la cuestión de confianza en el Congreso.*
4. *El Decreto ha de especificar el plazo de la intervención, conectándolo con una convocatoria electoral.*
5. *Si fuese necesario la declaración de alguno de los estados de excepción previstos en el Título XI, no podrán celebrarse elecciones antes de su levantamiento."*

Va ser voluntat explícita dels legisladors que van aprovar la Constitució rebutjar en el Ple del Congrés el vot particular que pretenia incorporar aquesta disposició, que en bona part és la que pretén incorporar ara per la porta del darrera l'acord del Consell de Ministres de 21 d'octubre sobre l'aplicació de l'art. 155 CE. No és admissible per tant en la Constitució que l'art.155 permeti el cessament del President i dels Consellers de la Generalitat i l'assumpció de les seves funcions per part d'un òrgan nomenat pel Gobierno estatal.

- El Gobierno estatal pretén decapitar el Govern de Catalunya i el Parlament pel fet de ser fidel al que han demanat els votants i per haver-se revoltat contra la deslleial Sentència que va retallar l'Estatut pactat i després ratificat pels catalans.



- A la vegada, les mesures proposades premien la inactivitat i la insensibilitat política de l'Estat cap a Catalunya. Així atorguen al mateix Gobierno estatal tot el poder polític, econòmic i administratiu de la Generalitat i anulen el Parlament. És molt fort, incomprendible, en un estat de dret. Es premia la incapacitat política del Gobierno estatal del Partido Popular, la seva incapacitat de diàleg, d'oferir propostes, d'oferir un projecte de futur per Espanya i de deixar construir un projecte de futur als catalans
- Les mesures que el Consell de Ministres proposa al Senat no son mesures de construcció, sinó de destrucció; no perseguen una millora de la convivència, al contrari, busquen trencar la convivència que Catalunya ha sabut assolir; no perseguen enfortir l'economia i el creixement econòmic, al contrari, busquen truncar-lo, tal com s'ha demostrat amb la vergonyosa campanya institucional del Govern de l'Estat per fer canviar seus socials d'empreses catalanes cap a l'exterior, o com s'ha demostrat amb la igualment vergonyosa intervenció de la Generalitat, bloquejant partides pressupostàries d'entitats socials, d'ajuts rurals i molt d'altres, amb el detestable objectiu d'aturar violentament la voluntat dels catalans, primer de fer un referèndum i d'autogovernar-se. No és això el que necessita Catalunya i no és això el que necessita Espanya. No és aquest el Gobierno estatal que Catalunya i Espanya es mereixen.
- Front a les mesures que pretén aprovar el Senat en aplicació de l'art. 155 CE, es pot considerar que la via d'impugnació jurisdiccional de l'acord adoptat pel Senat, pel qual s'ha autoritzat al Govern de l'Estat a adoptar mesures respecte de la Generalitat, podria ser objecte d'un recurs d'inconstitucionalitat davant el TC, dins el termini de 3 mesos i previ dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que disposa d'un mes per emetre el seu dictamen. Estarien legitimats per formular el recurs el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat. Si el cessament del Govern de la Generalitat i el veto a les iniciatives del Parlament es fan efectius, no hi hauria cap subjecte legitimat per plantejar aquest recurs.
- Pel que fa a les mesures que efectivament acabi adoptant pel Govern de l'Estat o per les autoritats designades per ell per donar instruccions o actuar en substitució de les de la Generalitat, podran ser objecte de conflicte de competència davant el TC, previ requeriment d'incompetència al Govern de l'Estat (que disposa d'un mes per a donar-hi resposta), i del preceptiu dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan legitimat per formular el



requeriment previ i el conflicte seria el Govern de la Generalitat. Per tant igualment en aquest cas, el cessament del Govern de la Generalitat impediria efectivament aquesta via d'impugnació.

- Així mateix, tota vegada que les mesures adoptades per les autoritats estatals intervencionistes serien mesures administratives, tot i que adoptades en unes circumstàncies extraordinàries, podrien ser impugnades davant els òrgans judicials de l'ordre contencios-administratiu, si així ho acordessin els Consellers respectius. Igualment, per tant, aquesta via d'impugnació quedaria limitada per les institucions estatals.
- Aquesta inviabilitat de la impugnació de les mesures demostra també la seva inconstitucionalitat, ja que deixa els actes de l'Estat sense cap control jurisdiccional i vulnera el dret fonamental de la Generalitat de Catalunya a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).
- En definitiva, les mesures que el Gobierno estatal demana al Senat no s'ajusten al que estableix l'article 155 CE i a l'article 189 del reglament del Senat, sinó que pretenen obtenir un "xec en blanc", d'entrada per convocar noves eleccions al Parlament de Catalunya en 6 mesos, termini que prèvia sol·licitud al Senat on el Gobierno estatal del partido popular té majoria absoluta, podrien perllongar. Un xec en blanc de mesures que són anticonstitucionals i antiestatutàries.
- No es pot pretendre afirmar que es vol "repositor la legalitat constitucional i estatutària vulnerada" amb un conjunt de mesures clarament inconstitucionals i, evidentment anti estatutaries, ja que substitueixen el Govern democràtic de Catalunya per un òrgan de Govern no democràtic i no previst a l'Estatut ni enllloc.
- Tampoc es pot demanar autorització al Senat per l'adopció d'un conjunt de mesures omnipotents, començant per la destitució de tot el Govern de la Generalitat, la suspensió de la autonomia i la pràctica eliminació de funcions al Parlament, quan el Senat precisa en l'art.189 del seu Reglament que, si el Govern decidís aplicar l'art.155 CE, hauria de presentar-li, per la seva aprovació, unes mesures acotades a un determinat contingut i abast. És evident que tampoc el Senat pot incomplir la seva pròpia normativa.



- De ser aprovades les mesures proposades pel Gobierno estatal al Senat i, particularment les que preveu aquest bloc, el dia de la seva entrada en vigor Catalunya passaria de ser una democràcia a ser una dictadura. Les mesures permeten al Gobierno estatal destituir la totalitat del Govern de la Generalitat, limitar la quasi totalitat de les competències del Parlament, ambdós elegits democràticament, i actuar al marge de la Constitució, de l'Estatut i de la preservació de drets fonamentals. Alhora pretenen obtenir pel Govern de l'Estat carta blanca per incomplir tot mena de normes i inclusi lleis relatives al funcionament de la Generalitat.

Respecte A LA PROPOSTA B) DE MESURES DIRIGIDES A L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

- Les mesures proposades, dirigides a l'administració de la Generalitat, estan vinculades a la principal: destituir tot el Govern de la Generalitat i silenciar el Parlament. Per tant no estan limitades a "donar instruccions", ni limitades a un "contingut" i "abast" concret, en conseqüència, en el context de l'art 155CE i de l'art. 189 RS son inadmissibles en si mateixes. Però a més la seva concreció encara ratifica més el seu abast universal sobre tots els òrgans de l'administració de la Generalitat i el seu personal, la qual cosa ratifica que són mesures de substitució de la Generalitat pel Gobierno estatal, en comptes de ser instruccions amb un contingut i abast limitat.
- Atorgar la facultat als òrgans i autoritats creades o designades per l'Estat de dirigir i donar instruccions a tota la Administració de la Generalitat, comporta la suspensió de la autonomia i l'assumpció de totes les competències autònòmiques per part del Govern estatal, la qual cosa no es pot justificar en l'art. 155 de la Constitució, que només habilitaria per l'adopció de mesures concretes. A més, l'extensió d'aquesta facultat a tots els serveis públics, les unitats i sectors de l'Administració de la Generalitat, no és compatible amb el caràcter concret i específic de les mesures que podrien tenir aixopluc en l'art 155 de la Constitució i en l'article 189 del Reglament del Senat.
- El mateix es pot afirmar de la capacitat d'acordar el nomenament, cessament o la substitució de qualsevol autoritat, càrrec públic o personal de la Administració de la Generalitat i dels seus organismes, ens i sector públic vinculat.



- Sotmetre a un règim de comunicació o autorització prèvia de totes les actuacions de la Generalitat, sense acotar continguts ni abast, sobrepassa de nou el que determinen l'art. 155CE i el 189 RS
- No és admissible tampoc que a través d'aquesta via el Gobierno estatal pretengui adoptar mesures disciplinàries més enllà de les existents a la legislació vigent

Respecte A LA PROPOSTA C) DE MESURES SINGULARS SOBRE DETERMINATS ÀMBITS D'ACTIVITAT ADMINISTRATIVA

- Seguretat i ordre públic. El funcionament del Cos de la Policia de la Generalitat de Catalunya Mossos d'Esquadra ha demostrat en la seva existència el seu compromís de servei, eficàcia, eficiència i proporcionalitat d'actuació en la defensa de la seguretat. La Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, garanteix la coordinació entre les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i la Policia Autònoma a Catalunya mitjançant la Junta de Seguretat, la qual, en el passat, no sempre va poder operar com calia, però no per causa de la Generalitat, sinó del Gobierno estatal. El temor dels ciutadans de Catalunya és que amb aquesta mesura s'incrementi exponencialment la tensió i la violència al carrer amb participació de forces de seguretat, tal com va passar el dia 1 d'octubre amb les forces de seguretat de l'Estat.
- Àrea de gestió econòmica, financera, tributària i pressupostària. Les mesures proposades en aquest cas són específiques, si bé no ho són les ja adoptades anteriorment en la Ordre HFP/878/2017, de 15 de setembre, per la qual el Ministeri d'Hisenda va intervenir totalment els comptes de la Generalitat, una mesura que ha paralitzat bona part de l'activitat econòmica pública de la Generalitat, malgrat correspondre a pressupostos legalment aprovats i afectar a múltiples àrees que no tenen res a veure respecte si hi ha o no un procés independentista de Catalunya. Una cosa és imposar a la Comunitat Autònoma l'elaboració d'un pla o la comprovació de la seva idoneïtat per assolir uns determinats objectius, i una altra, ben diferent, substituir la competència autonòmica per adoptar les seves pròpies polítiques
- Àrea de telecomunicacions i comunicacions electròniques i audiovisuals. Les mesures proposades sobre telecomunicacions i comunicacions electròniques pretenen de nou tenir un abast universal d'actuació sobre uns instruments que afecten a tota la Generalitat, no són per tant mesures dirigides amb un contingut i abast determinat, com exigeix l'art.189 RS.



- Pel que fa al control audiovisual, és evidentment una mesura demagògica, doncs la política relativa als mitjans públics de comunicació de Catalunya és més transparent i objectiva que la dels mitjans públics estatals. El Consell d'Informatius de TVE ha publicat un dur i detallat informe de 72 pàgines en què carreguen contra la cobertura que ha dut a terme la cadena pública durant la crisi a Catalunya i la seva manipulació.

Respecte A LA PROPOSTA D) DE MESURES DIRIGIDES AL PARLAMENT DE CATALUNYA

- Les mesures proposades pel Consell de Ministres al Senat relatives a la supressió i limitació de les facultats del Parlament de Catalunya, deixant-lo pràcticament amb la sola funció de representació, és un atac a la democràcia que desnaturalitza el caràcter representatiu de la Cambra i vulnera el dret fonamental, reconegut a l'art. 23 CE, a l'exercici dels seus càrrecs parlamentaris dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya. És una vulneració flagrant de l'Estatut que la proposta de mesures proposades pel Govern al Senat diu que vol fer complir.
- Respecte que la Presidenta del Parlament no podrà proposar candidat a la Presidència de la Generalitat ni convocar el debat d'investidura d'un nou President, desnaturalitza el caràcter de sistema parlamentari del Govern que garanteix l'art. 152 de la Constitució espanyola, que va ser una de les condicions bàsiques del pacte constituent envers Catalunya i, en el mateix sentit, vulnera igualment les previsions corresponents de l'EAC (art 55 EAC).
 - Respecte de la transferència, al òrgan de control que determini el Senat, de la funció de control parlamentari de l'executiu i de l'administració a Catalunya, priva al Parlament de Catalunya d'una de les seves funcions essencials que legitima democràticament al Govern i a la seva direcció política de l'Administració de la Generalitat.
 - Respecte de la limitació de les funcions d'impuls parlamentari de l'acció del Govern, i la introducció d'un període d'un mes per a la tramitació d'iniciatives parlamentàries amb la facultat de veto dins d'aquest mes per part del Govern de l'Estat, són mesures que desnaturalitzen igualment la funció parlamentària de la cambra catalana. Cal recordar que ja en els debats constitutius l'any 1978 es va rebutjar la possibilitat



d'introduir a la Constitució espanyola aquesta facultat de veto estatal a les lleis autonòmiques. Per això, reintroduir-la ara és contrari a l'esperit mateix de la Constitució espanyola.

Es pot concloure que aquestes mesures priven al Parlament de totes les funcions essencials que el defineixen com a cambra parlamentària, la electiva del President, la de control i impuls del Govern i la funció legislativa.

A més, en el seu conjunt, aquestes mesures afecten les principals institucions de l'autogovern de Catalunya i comporten, de fet, la suspensió de l'autonomia política de Catalunya.

Front a aquestes mesures que pretén aprovar el Senat en aplicació de l'art. 155 CE, es pot considerar que la via d'impugnació jurisdiccional de l'accord adoptat pel Senat, pel qual s'ha autoritzat al Govern de l'Estat a adoptar mesures respecte de la Generalitat, podria ser objecte d'un recurs d'inconstitucionalitat davant el TC, dins el termini de 3 mesos i previ dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que disposa d'un mes per emetre el seu dictamen. Estarien legitimats per formular el recurs el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat. Si el cessament del Govern de la Generalitat i el veto a les iniciatives del Parlament es fan efectius, no hi hauria cap subjecte legitimat per plantejar aquest recurs.

Aquesta inviabilitat de la impugnació de les mesures demostra també la seva inconstitucionalitat, ja que deixa els actes de l'Estat sense cap control jurisdiccional i vulnera el dret fonamental de la Generalitat de Catalunya a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

En definitiva, les mesures que el Gobierno estatal demana al Senat no s'ajusten al que estableix l'article 155 CE i a l'article 189 del reglament del Senat, sinó que prenenen obtenir un "xec en blanc", d'entrada per convocar noves eleccions al Parlament de Catalunya en 6 mesos, termini que, prèvia sol·licitud al Senat on el Gobierno estatal del partit popular té majoria absoluta, podrien perllongar. Un xec en blanc de mesures que són anticonstitucionals i antiestatutàries.

No es pot pretendre afirmar que es vol "repositor la legalitat constitucional i estatutària vulnerada" amb un conjunt de mesures clarament inconstitucionals i, evidentment anti estatutaries, ja que substitueixen el Govern democràtic de Catalunya per un òrgan de Govern no democràtic i no previst a l'Estatut ni enllot.

Tampoc es pot demanar autorització al Senat per l'adopció d'un conjunt de mesures omnipotents, començant per la destitució de tot el Govern de la Generalitat, la



suspensió de la autonomia i la pràctica eliminació de funcions al Parlament, quan el Senat precisa en l'art.189 del seu Reglament que, si el Govern decidís aplicar l'art.155 CE, hauria de presentar-li, per la seva aprovació, unes mesures acotades a un determinat contingut i abast. És evident que tampoc el Senat pot incomplir la seva pròpia normativa.

De ser aprovades les mesures proposades pel Gobierno estatal al Senat i, particularment les que preveu aquest bloc, el dia de la seva entrada en vigor Catalunya passaria de ser una democràcia a ser una dictadura. Les mesures permeten al Gobierno estatal destituir la totalitat del Govern de la Generalitat, limitar la quasi totalitat de les competències del Parlament, ambdós elegits democràticament, i actuar al marge de la Constitució, de l'Estatut i de la preservació de drets fonamentals. Alhora pretenen obtenir pel Govern de l'Estat carta blanca per incomplir tot mena de normes i inclusi lleis relatives al funcionament de la Generalitat.

Respecte a LA PROPOSTA E) DE MESURES DE CARACTER TRANSVERSAL

Les mesures proposades pel Consell de Ministres al Senat de caràcter transversal tenen com objectiu tancar el cercle de la substitució de l'autonomia de la Generalitat de Catalunya –incloent-hi el Parlament- per la dependència del Gobierno estatal. De nou són mesures que sota l'adjectiu de “transversals” pretenen donar un caràcter universal a la dependència administrativa de la totalitat d’òrgans de la Generalitat respecte el Gobierno estatal o l’òrgan que aquest determine. També en aquest cas són mesures que no s’ajusten als límits, que n’hi ha, per a l’aplicació del art. 155 CE i del art. 189 RS.

- No resulta admissible en un entorn de respecte a la legalitat, l’atorgament il·limitat al Gobierno estatal de capacitats “d’organització, creació, modificació i extinció d’aquells organismes i entitats públiques creades o autoritzades per llei”. Una cosa és atorgar capacitats per a “donar instruccions” als organismes i entitats públiques i una molt diferent és atorgar carta blanca al Govern per arribar a “extingir” organismes que han estat creats per llei
- Idèntica consideració mereixen les disposicions destinades a donar seguretat jurídica a les decisions que adoptin els òrgans que determine el Gobierno estatal.
- La disposició E9, de mantenir les disposicions vigents fins la presa de possessió del nou Govern de la Generalitat, després d’unes eleccions al Parlament que



canviïn l'actual majoria parlamentària manifesta explícitament que aquest és un cop d'Estat a les institucions catalanes amb el sol objectiu de modificar la seva composició.

- De ser aprovades les mesures proposades pel Gobierno estatal al Senat i, particularment les que preveu aquest bloc, el dia de la seva entrada en vigor Catalunya passaria de ser una democràcia a ser una dictadura. Les mesures permeten al Gobierno estatal destituir la totalitat del Govern de la Generalitat, limitar la quasi totalitat de les competències del Parlament, ambdós elegits democràticament, i actuar al marge de la Constitució, de l'Estatut i de la preservació de drets fonamentals. Alhora pretenen obtenir pel Govern de l'Estat carta blanca per incomplir tot mena de normes i inclús lleis relatives al funcionament de la Generalitat.